

Laia Navajas Ramos

**VICTIMIZACIÓN SECUNDARIA E IMPACTO PSICOLÓGICO EN MENORES
VÍCTIMAS DE ABUSO SEXUAL INFANTIL: UNA REVISIÓN SISTEMÁTICA
DE LOS FACTORES ASOCIADOS AL PROCESO JUDICIAL**

TRABAJO DE FIN DE GRADO

Dirigido por D. Juan Pablo Sanabria-Mazo

Grado en Psicología



UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

Tarragona

2026

ÍNDICE

RESUMEN	1
ABSTRACT	1
1. INTRODUCCIÓN	2
2. METODOLOGÍA	6
2.1. Diseño y originalidad	6
2.1.1. Estrategia de búsqueda	7
2.2. Criterios de elegibilidad	8
2.3. Proceso de selección de artículos	10
2.4. Evaluación de la calidad metodológica y riesgo de sesgo	11
2.5. Extracción de datos	12
2.6. Estrategia de síntesis	12
3. RESULTADOS	13
3.1. Proceso de selección	13
3.2. Características de los estudios incluidos	15
3.2.1. Características metodológicas y contextuales de las investigaciones	23
3.2.2. Características sociodemográficas de los participantes y muestras	24
3.3. Evaluación de la calidad metodológica y riesgo de sesgo	25
3.4. Análisis temático de la evidencia	29
3.4.1. Indicadores y métodos de evaluación de la victimización secundaria	29
3.4.2. Factores de riesgo del proceso judicial	30
3.4.3. Factores de protección y buenas prácticas judiciales	32

4. DISCUSIÓN	34
4.1. Hallazgos principales	34
4.2. Implicaciones prácticas y clínicas	36
4.3. Limitaciones y fortalezas del estudio	38
4.4. Futuras líneas de investigación	41
4.5. Conclusiones	42
5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	43
6. ANEXO	46
Anexo A. Tabla de evaluación de calidad y criterios de inclusión de los estudios seleccionados	46

ÍNDICE DE TABLAS Y FIGURAS

Tabla 1. <i>Estructura de la pregunta de investigación mediante el enfoque PEO</i>	7
Tabla 2. <i>Estrategia de búsqueda detallada en Web of Science</i>	8
Tabla 3. <i>Matriz de criterios de elegibilidad para la selección de estudios</i>	8
Tabla 4. <i>Artículos excluidos de la revisión sistemática en las fases de cribado e idoneidad ordenados cronológicamente</i>	14
Tabla 5. <i>Resumen de la evidencia científica de los estudios incluidos (n = 14)</i>	16
Tabla 6. <i>Evaluación de la calidad metodológica y riesgo de sesgo de los estudios incluidos (n = 14)</i>	27
Figura 1. <i>Diagrama de flujo de la selección de artículos (PRISMA)</i>	15
Figura 2. <i>Modelo integrado de factores de riesgo y propuestas de intervención basadas en la evidencia para la prevención de la victimización secundaria</i>	38

Resumen

El proceso judicial convencional con frecuencia somete a las víctimas menores de edad a una victimización secundaria que interfiere en su salud mental y en su recuperación clínica. El objetivo de esta revisión sistemática fue analizar el impacto de los factores temporales, procedimentales y ambientales del sistema de justicia penal en menores, así como identificar prácticas institucionales diseñadas para mitigar este daño. Tras una búsqueda inicial que arrojó 121 registros en Web of Science, se aplicaron criterios de inclusión (estudios empíricos y doctrinales enfocados en menores expuestos a procesos penales) y exclusión para seleccionar una muestra final de 14 artículos. La calidad metodológica y el riesgo de sesgo se evaluaron mediante las herramientas AXIS y CASPe, realizando posteriormente una síntesis narrativa de la evidencia. Los resultados sugieren que las demoras crónicas en las causas penales, la sobreexposición a interrogatorios múltiples y la hostilidad de los entornos judiciales tradicionales actúan como vectores de estrés agudo, cronificando sintomatología ansioso-depresiva y provocando el colapso de la memoria operativa de los menores. En conclusión, se subraya la necesidad de estandarizar la prueba preconstituida, implementar la preparación judicial psicopedagógica y transicionar hacia modelos arquitectónicos amigables especializados (como los Centros de Defensa de la Infancia o el Modelo Barnahus) para proteger la integridad de la huella mnésica y garantizar el interés superior del menor en sede legal.

Palabras clave: Victimización secundaria; Menores; Proceso judicial; Prueba preconstituida; Psicología forense; Revisión sistemática.

Abstract

The conventional judicial process often subjects child victims to secondary victimization that severely interferes with their mental health and clinical recovery. The objective of this systematic review was to analyze the impact of temporal, procedural, and environmental factors of the criminal justice system on minors, as well as to identify institutional best practices designed to mitigate this harm. Following an initial search that yielded 121 records in Web of Science, eligibility criteria (empirical and doctrinal studies focused on minors in criminal proceedings) were applied to select a final sample of 14 articles. Methodological quality and risk of bias were assessed using the AXIS and CASPe tools, followed by a narrative synthesis of the evidence. The results demonstrate that chronic delays in criminal cases, overexposure to multiple interviews, and the hostility of traditional judicial settings act as vectors of acute distress, chronifying anxiety-depressive

symptomatology and causing the collapse of minors' working memory. In conclusion, the empirical evidence underlines the need to standardize pre-constituted evidence, implement psychopedagogical court preparation, and transition toward specialized child-friendly architectural models (such as Children's Advocacy Centers or the Barnahus model) to safeguard the integrity of the memory trace and guarantee the best interests of the child in legal proceedings.

Keywords: Secondary victimization; Minors; Judicial process; Pre-constituted evidence; Forensic psychology; Systematic review.

1. Introducción

El abuso sexual infantil se define como cualquier acto de naturaleza sexual en el que se utiliza a un menor para la estimulación o gratificación sexual de un adulto o de otro menor en posición de poder o desigualdad (Consejo de Europa, 2007; Organización Mundial de la Salud [OMS], 2020). Este concepto incluye tanto conductas con contacto físico —como la violación o los tocamientos— como sin contacto —como el exhibicionismo, la exposición a material pornográfico o la solicitud de contenido sexual— (Ley Orgánica 8/2021; Observatorio de la Infancia, 2021). En el contexto jurídico español, tras la reforma del Código Penal mediante la Ley Orgánica 10/2022, todos los actos sexuales no consentidos se consideran agresión sexual, eliminándose la distinción previa con el abuso sexual (Ley Orgánica 10/2022).

El abuso sexual infantil constituye un problema de gran magnitud a nivel global. Según estimaciones recientes, aproximadamente 650 millones de mujeres y entre 410 y 530 millones de hombres han sufrido alguna forma de violencia sexual durante su infancia (United Nations International Children's Emergency Fund [UNICEF], 2024). En España, la relevancia del fenómeno se refleja en los registros oficiales; según el Anuario Estadístico de la Criminalidad, los menores de edad representan casi la mitad de las víctimas de los delitos contra la libertad e indemnidad sexual conocidos por las fuerzas de seguridad (Ministerio del Interior, 2024; Save the Children, 2022).

Las consecuencias psicológicas, físicas y sociales que genera el abuso sexual infantil en las víctimas son clínicamente relevantes (OMS, 2020). La evidencia empírica reciente ha confirmado una mayor probabilidad de desarrollar trastornos depresivos, ansiedad, trastorno de estrés postraumático (TEPT), conductas autolesivas, ideación suicida, baja autoestima y dificultades persistentes en las relaciones interpersonales (Pereda y Tamarit,

2021; World Mental Health Report, 2022). Estas consecuencias pueden persistir a lo largo del ciclo vital, ya que el abuso sexual infantil se considera un acontecimiento potencialmente traumático cuyos efectos están modulados por factores críticos como la cronicidad del abuso, el vínculo con el agresor o la calidad del apoyo social recibido tras la revelación (Hébert et al., 2020; American Psychological Association [APA], 2022).

Además del impacto derivado del propio abuso, una parte relevante de las víctimas debe enfrentarse a un proceso judicial tras la revelación de los hechos (Ministerio del Interior, 2024; Save the Children, 2022). Este proceso, si no se maneja bajo parámetros de justicia adaptada, puede convertirse en una fuente adicional de daño psicológico denominada victimización secundaria (Pereda y Tamarit, 2021; Villacampa y Torres, 2020). Estudios recientes indican que un porcentaje elevado de víctimas todavía no llega a denunciar debido a sentimientos de vergüenza, el miedo a la falta de credibilidad o el temor a enfrentarse a un sistema judicial percibido como excesivamente burocrático, lento y revictimizante (Consejo de Europa, 2022; Save the Children, 2022).

Cuando el procedimiento judicial se inicia, el testimonio del menor adquiere un papel central, ya que en muchas ocasiones constituye la principal prueba de cargo ante la ausencia de evidencia física o testigos directos (Manzanero, 2021; Tribunal Supremo, 2023). Esto implica que la valoración judicial se fundamenta en la huella mnésica del menor y en la huella psicopatológica asociada (Muñoz et al., 2016). Esta situación sitúa al menor en una posición de especial vulnerabilidad, dado que la calidad y la fiabilidad de su testimonio pueden verse afectadas por factores como el desarrollo evolutivo, la sugestibilidad inducida por el tipo de interrogatorio o el contexto ambiental donde se realiza la entrevista (González et al., 2024; Otgaar et al., 2022).

El fenómeno de la victimización secundaria se sustenta teóricamente en la confluencia de modelos victimológicos y modelos del trauma. Desde la perspectiva victimológica, autores como Pereda y Tamarit (2021) y Villacampa (2020) destacan el modelo de interacción sistémica, donde el daño no proviene del delito en sí, sino de la respuesta institucional inadecuada, la cual opera como un estresor crónico que invalida la experiencia de la víctima. Por otro lado, desde los modelos de trauma, el concepto se explica mediante la teoría de la retraumatización (Hébert et al., 2020), que sugiere que la exposición repetida a recordatorios del abuso en un entorno hostil o no adaptado (como las salas de vistas) activa de nuevo la respuesta de estrés postraumático, impidiendo el procesamiento cognitivo del evento original y cronificando la sintomatología (APA, 2022; Miller et al., 2021).

Uno de los principales riesgos asociados a la participación en el sistema judicial es la victimización secundaria, entendida como el daño psicológico adicional que sufre la víctima como consecuencia de su interacción con las instituciones y el propio procedimiento legal (Pereda y Tamarit, 2021; Villacampa, 2020). En el caso de los menores víctimas de abuso sexual infantil, este fenómeno se vincula estrechamente con la reiteración del testimonio en sucesivas diligencias e interrogatorios, lo que favorece la reexperimentación del trauma y la consolidación de sintomatología ansioso-depresiva, culpa y estrés agudo (Consejo General del Poder Judicial [CGPJ], 2023; González et al., 2024). En España, a pesar de que la Ley Orgánica 8/2021 establece la obligatoriedad de la prueba preconstituida para menores de 14 años, informes recientes advierten que su implementación práctica aún enfrenta obstáculos técnicos y de especialización, lo que obliga a los menores a declarar en múltiples ocasiones a lo largo del proceso (Fiscalía General del Estado, 2024; Save the Children, 2022).

La duración de los procesos judiciales constituye otro factor crítico de victimización secundaria, ya que la prolongación de la causa durante meses o años interfiere directamente en la recuperación psicológica y en el cierre del proceso traumático de la víctima (Cantarón et al., 2022; CGPJ, 2023). A pesar de la existencia de un marco normativo robusto orientado a la protección del menor —fundamentado en la Ley 4/2015 del Estatuto de la Víctima y, especialmente, en la Ley Orgánica 8/2021 de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (LOPVI)—, la aplicación práctica de estas medidas sigue siendo insuficiente. La carencia de recursos especializados y las demoras estructurales del sistema judicial impiden que las salvaguardas legales protejan efectivamente al menor de la revictimización (Fiscalía General del Estado, 2024; Save the Children, 2022).

A pesar del amplio volumen de investigación sobre abuso sexual infantil, la literatura científica se ha centrado predominantemente en explorar las consecuencias clínicas derivadas del evento traumático inicial (Hébert et al., 2020; Li et al., 2022), prestando una atención significativamente menor al impacto específico que el proceso judicial ejerce sobre las víctimas. La evidencia disponible sugiere que determinados elementos del procedimiento actúan como factores de riesgo críticos; por ejemplo, la reiteración de testimonios y la falta de entornos adaptados se asocian directamente con un incremento en la sintomatología del trastorno de estrés postraumático (González et al., 2024; Save the Children, 2022). Investigaciones recientes, en cambio, resaltan que prácticas basadas en la especialización de los profesionales y la implementación de la prueba preconstituida

—pilares del modelo de atención integrada— funcionan como factores de protección esenciales para mitigar la victimización secundaria (Save the Children, 2022; Villacampa y Torres, 2020).

Tras realizar una búsqueda preliminar —siguiendo las directrices del *Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses* (PRISMA)— en bases de datos como *Web of Science* (WoS) y una consulta adicional en el *International Prospective Register of Systematic Reviews* (PROSPERO), se ha constatado que hasta el momento no existe ninguna revisión sistemática publicada que sintetice el impacto del proceso judicial bajo el prisma de las reformas legislativas españolas de 2021. Si bien se ha identificado un protocolo de revisión en curso con una temática similar, este trabajo de fin de grado (TFG) se diferencia de dicha propuesta por su enfoque específico en la interpretación de la evidencia internacional aplicada al contexto judicial español. La presente revisión, por tanto, trasciende la síntesis de resultados para identificar qué factores del procedimiento actúan como riesgos dentro de la realidad jurídica y asistencial de España.

Por todo lo expuesto, el objetivo general de este TFG fue sintetizar la evidencia sobre la victimización secundaria en menores víctimas de abuso sexual infantil durante el proceso judicial, analizando tanto sus factores asociados como las medidas orientadas a su reducción. En esta revisión sistemática, se entendió la victimización secundaria como el constructo teórico que describe el daño derivado de la relación entre la víctima y el sistema legal; este fenómeno se operacionaliza a través del impacto psicológico, entendido como el conjunto de manifestaciones clínicas medibles (tales como estrés, ansiedad, depresión o sintomatología postraumática) que resultan de dicha interacción. Para alcanzar este objetivo general, se propusieron los siguientes objetivos específicos: (1) analizar los métodos y los indicadores utilizados en la literatura para evaluar la victimización secundaria en menores víctimas de abuso sexual infantil dentro del contexto judicial; (2) examinar los factores del proceso judicial (como la demora procesal, la reiteración de declaraciones o el entorno físico) asociados al incremento de la victimización secundaria; y (3) identificar las prácticas o medidas judiciales (como la prueba preconstituida o la especialización de los profesionales) que la evidencia señala como eficaces para reducir la victimización secundaria.

2. Metodología

2.1. Diseño y originalidad

Esta revisión sistemática se realizó siguiendo las directrices de la declaración más reciente de PRISMA (Page et al., 2021). Con el fin de garantizar la pertinencia, la originalidad y la contribución diferencial de la investigación, se ejecutó un procedimiento metodológico estructurado en dos fases cronológicas consecutivas.

En la primera fase, se llevó a cabo una consulta exhaustiva en el registro internacional de revisiones sistemáticas (PROSPERO) mediante la introducción de términos de búsqueda controlados relativos a la población, la exposición judicial y el impacto psicológico. Durante este proceso de verificación preliminar se identificó un protocolo de revisión sistemática en curso relacionado con la temática de este TFG, titulado "The psychological impact of the criminal justice system on child victims of sexual abuse: A systematic review focusing on the experiences of children" y registrado bajo el código CRD42024578719. No obstante, al encontrarse dicho estudio en fase de desarrollo (*Ongoing*) y carecer de resultados empíricos publicados, se constató la inexistencia de literatura secundaria previa que indexara de forma terminada el fenómeno. Asimismo, los registros secundarios alternos que se identificaron se acotaban a parcelas tangenciales, tales como el impacto exclusivo en el ámbito del abuso en línea (CRD42024548986) o las dinámicas de revelación intrafamiliar (CRD420250653512).

Ante la ausencia de revisiones sistemáticas previas finalizadas que se solaparan de forma directa con la pregunta de investigación de este TFG, se determinó la viabilidad y la originalidad del estudio en una segunda fase. De este modo, la investigación se diseñó con una doble vertiente analítica y complementaria: por un lado, identificar los factores del proceso judicial que incrementan el impacto psicológico (factores de riesgo) y, por otro, analizar aquellas medidas procedimentales y ambientales que reducen la victimización secundaria (factores de protección). Esta estructura permitió articular una síntesis de evidencias internacionales para su posterior transferencia adaptada y discusión crítica dentro del escenario judicial español contemporáneo.

Para garantizar el cumplimiento estricto de los estándares de transparencia y calidad metodológica en el reporte de esta investigación, se ha cumplimentado de forma pormenorizada la lista de comprobación de la declaración PRISMA 2020. Dicha tabla de verificación, donde se detalla la localización exacta de cada ítem evaluado dentro de

las páginas de este documento, se encuentra disponible para su consulta en el Anexo A de este trabajo.

2.1.1. Estrategia de búsqueda

La estrategia de búsqueda se diseñó siguiendo el enfoque PEO (Población, Exposición, Resultado), el cual permite estructurar la pregunta de investigación y optimizar la identificación de estudios relevantes en bases de datos (Munn et al., 2018). Esta estructura facilita la transición de conceptos teóricos a términos de búsqueda operativos. En la Tabla 1 se presentan los componentes que integran la pregunta de investigación de esta revisión sistemática.

Tabla 1. Estructura de la pregunta de investigación mediante el enfoque PEO (Population, Exposure, Outcome).

Componente PEO	Definición	Términos clave
P (Población)	Menores víctimas de abuso sexual infantil	Child sexual abuse, child victims, menores, abuso sexual infantil
E (Exposición)	Participación en el proceso judicial y forense	Court, trial, testimony, judicial process, testimonio, proceso judicial
O (Resultado)	Victimización secundaria e impacto psicológico (evaluada a través de indicadores de impacto psicológico síntomas de estrés postraumático, ansiedad, depresión o distrés, entre otros)	Secondary victimization, Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD), anxiety, psychological impact, victimización secundaria, impacto psicológico

Para la definición de los términos de búsqueda y la garantía de un lenguaje controlado, se consultaron los Descriptores en Ciencias de la Salud (DeCS) y los *Medical Subject Headings* (MeSH), asegurando la inclusión de terminología validada en la literatura internacional sobre victimización secundaria e impacto psicológico forense.

La búsqueda principal se realizó en la base de datos *Web of Science (Core Collection)*, combinando mediante operadores booleanos (AND y OR) los tres bloques conceptuales de términos indexados en su versión inglesa para optimizar el alcance

de la recuperación en los índices internacionales. Se seleccionó el campo de búsqueda "Topic" (Tema), el cual rastrea los términos de forma automatizada en el título, el resumen y las palabras clave de los artículos.

Asimismo, para refinar la búsqueda y delimitar la muestra de acuerdo con los criterios de elegibilidad establecidos, se aplicaron filtros iniciales de acotación temporal abarcando los años entre 2010-2026, restricciones idiomáticas (artículos en inglés y español) y de tipología documental (excluyendo literatura gris, capítulos de libro y actas de congresos). Con el fin de garantizar la replicabilidad de este procedimiento, en la Tabla 2 se detalla la estrategia de búsqueda empleada y los registros recuperados inicialmente.

Tabla 2. Estrategia de búsqueda detallada en Web of Science.

Base de datos	Términos de búsqueda	Campos de búsqueda	Filtros	Registros recuperados (n)
Web of Science (WoS)	TS=((("child sexual abuse" OR "child sexual assault") AND (court OR trial OR testimony OR "criminal justice" OR judicial) AND ("psychological impact" OR anxiety OR distress OR "secondary victimization"))	Topic (Título, Resumen, Keywords)	Idiomas: Inglés, Español. Periodo: 2010-2026. Tipo de documento: Article, Review.	119

2.2. Criterios de elegibilidad

Para garantizar que la selección de estudios respondiera a los objetivos de la investigación y que permitieran delimitar el alcance del fenómeno, se definieron criterios de inclusión y exclusión unificados. A efectos de esta revisión, la población diana de "menores de edad" queda operacionalizada cronológica y evolutivamente cubriendo las etapas de la primera infancia (0-5 años), la niñez media o etapa escolar (6-11 años) y la adolescencia (12-18 años), garantizando así la exploración del impacto en todo el espectro del desarrollo pediátrico. En la Tabla 3 se presentan los criterios de elegibilidad aplicados durante la fase de cribado.

Tabla 3. Matriz de criterios de elegibilidad para la selección de estudios.

Criterios / dimensión	Criterios de inclusión (Aceptados)	Criterios de exclusión (Rechazados)
Tipo de estudio	Investigaciones empíricas originales (diseños cuantitativos, cualitativos o mixtos). Revisiones sistemáticas que aporten datos primarios sobre el fenómeno.	Literatura gris (artículos de opinión, editoriales, revisiones narrativas, ensayos teóricos, notas de prensa o documentos sin metodología sistemática).
Población y etapa del desarrollo	Menores de edad (0 a 18 años) evaluados de forma contemporánea al proceso legal. Incluye primera infancia (0-5), niñez media (6-11) y adolescencia (12-18).	Investigaciones centradas exclusivamente en población adulta. Estudios retrospectivos basados en el recuerdo de adultos sobre sus vivencias infantiles (justificado por el sesgo de memoria y obsolescencia legislativa). Muestras mixtas donde no se desglosen los datos de los menores.
Naturaleza del evento	Casos específicos de abuso sexual infantil o agresiones sexuales en la infancia.	Otras formas de victimización infantil (negligencia, maltrato físico puro) no vinculadas a delitos de naturaleza sexual.
Vinculación procesal y enfoque	Investigaciones que analicen la victimización secundaria derivada directamente de la participación en el proceso judicial o forense.	Estudios sobre secuelas del abuso sin alusión al contexto legal. Enfoques clínicos exclusivos (evaluación de la eficacia de tratamientos terapéuticos aislados de los estresores forenses).
Variables e indicadores (Outcomes)	Indicadores de impacto psicológico operacionalizados (ansiedad, TEPT, depresión, distrés o sintomatología psicopatológica). Factores procedimentales (número de declaraciones, tipo de interrogatorio, demoras o medidas de protección).	Investigaciones de corte puramente jurídico o legal que analicen la normativa o jurisprudencia, pero que no aporten una evaluación empírica de indicadores psicológicos o sintomatología en las víctimas.
Periodo temporal (2010-2026)	Publicaciones comprendidas entre 2010-2026. Justificado por:	Estudios publicados antes de 2010 (analizan marcos procedimentales y tecnologías de protección obsoletas)

	• Evolución legislativa: post-Convenio de Lanzarote (no revictimización y prueba preconstituida). • Consolidación conceptual: desarrollo de herramientas forenses para aislar el estresor judicial. • Actualización tecnológica: emergencia de entornos modernos (salas amigables, Modelo Barnahus).	que desvirtuarían la realidad práctica actual).
Idioma y disponibilidad	Publicaciones en español o inglés. Revisadas por pares y con acceso al texto completo.	Documentos en idiomas distintos a los seleccionados o aquellos cuyo texto completo sea inaccesible tras consulta en repositorios institucionales.

2.3. Proceso de selección de artículos

El procedimiento de selección y de cribado de la literatura se estructuró en cuatro fases consecutivas siguiendo las directrices de la declaración PRISMA (Page et al., 2021) para asegurar un flujo de información transparente y reproducible.

En la primera fase, correspondiente a la identificación, se registraron los registros recuperados mediante la estrategia de búsqueda ejecutada en *Web of Science (Core Collection)*. Estas referencias se exportaron al gestor bibliográfico *Mendeley Reference Manager*, donde se procedió a la verificación automatizada y manual para la eliminación de registros duplicados.

En la segunda fase, correspondiente al cribado (*screening*), se realizó una primera evaluación mediante la lectura crítica de los títulos y los resúmenes de los artículos, descartando aquellos trabajos que incumplían los criterios de elegibilidad establecidos (tales como investigaciones con muestras exclusivamente adultas o carentes de vinculación directa con el entorno judicial).

En la tercera fase, orientada a la idoneidad (*eligibility*), los artículos preseleccionados se evaluaron en profundidad mediante la lectura del texto completo, verificando su ajuste definitivo con los criterios de elegibilidad de la revisión y registrando sistemáticamente los motivos de exclusión técnica de aquellos trabajos descartados.

Finalmente, en la cuarta fase, correspondiente a la fase de inclusión (*inclusion*), se determinaron los estudios definitivos que conformaron la síntesis narrativa de este trabajo. El flujo secuencial de decisiones metodológicas se documentó de forma gráfica en la Figura 1 (diagrama de flujo PRISMA), la cual se presenta detalladamente en el capítulo de resultados.

2.4. Evaluación de la calidad metodológica y riesgo de sesgo

Para garantizar la validez interna de las conclusiones de esta revisión sistemática, se realizó una evaluación de la calidad metodológica general y una del riesgo de sesgo específico de los estudios seleccionados, entendiendo la primera como el grado de adherencia a los estándares de diseño científico y la segunda como la presencia de errores sistemáticos que podrían distorsionar los hallazgos. Dado que la muestra final integra diversas aproximaciones metodológicas, se emplearon dos herramientas de lectura crítica validadas y adaptadas a cada tipología, prescindiendo de instrumentos de evaluación secundaria al no incorporar revisiones previas en la muestra definitiva.

Para los estudios de diseño cuantitativo transversal y de registros institucionales, se aplicó la herramienta *Appraisal tool for Cross-Sectional Studies* (AXIS; Downes et al., 2016). Este instrumento consta de 20 ítems de verificación dicotómica (con opciones de respuesta "Sí", "No" o "No especificado") organizados en tres grandes bloques que evalúan: (1) la calidad de la introducción y métodos, (2) los resultados y (3) la discusión junto a los aspectos éticos. Su interpretación es cualitativa y acumulativa: no establece un punto de corte numérico rígido, sino que a mayor número de respuestas afirmativas, menor es el riesgo de sesgo. Esto permite clasificar los estudios en calidad alta, moderada o baja, según las limitaciones detectadas en el tamaño muestral o en el control de variables de confusión.

Para los estudios cualitativos y de metodología mixta, se utilizó el programa de habilidades en lectura crítica *Critical Appraisal Skills Programme Español* (CASPe; Cabello, 2005). Esta plantilla se compone de 10 preguntas guía estructuradas en tres áreas: (1) la validez de los resultados (mediante dos preguntas de cribado eliminatorias sobre objetivos y adecuación del enfoque), (2) el rigor metodológico del análisis (examinando críticamente el sesgo de reflexividad en la relación investigador-participante y los comités de ética) y (3) la utilidad de los hallazgos. Al igual que AXIS, CASPe no puntúa de forma aritmética, sino que guía al evaluador hacia un juicio crítico

global sobre si el estudio presenta un riesgo de sesgo bajo (calidad alta) o si sus limitaciones conceptuales obligan a ponderar sus conclusiones con cautela.

2.5. Extracción de datos

La información de los artículos seleccionados se recogió mediante una hoja de extracción de datos diseñada *ad hoc* para este TFG. De cada estudio se extrajeron y registraron las variables de interés, las cuales se presentan en las tablas de síntesis del apartado de resultados. La estructura de enumeración fue la siguiente: (1) datos de identificación, incluyendo el autor o autores principales, el año de publicación, el país de realización y los objetivos específicos del estudio; (2) características metodológicas, incorporando el diseño de la investigación, el tamaño y la descripción sociodemográfica de la muestra (rango de edad y sexo) y los instrumentos, entrevistas o escalas de evaluación aplicados para medir el impacto psicológico; (3) variables del proceso judicial, abarcando los factores procedimentales analizados como potenciales estresores o elementos de protección (tales como el número de declaraciones, los tiempos de demora legal, los entornos físicos adaptados o la implementación de la prueba preconstituida); y (4) resultados y conclusiones analíticas, recopilando los principales hallazgos empíricos sobre la victimización secundaria detectada y la relación observada entre el procedimiento legal y el bienestar psicológico de los menores.

2.6. Estrategia de síntesis

Debido a la heterogeneidad de muestras, aproximaciones metodológicas y contextos judiciales en los estudios incluidos en la revisión, se realizó una síntesis narrativa de tipo temático para estructurar los resultados. La información se organizó siguiendo los objetivos específicos de la revisión a través de tres ejes analíticos secuenciales: (1) el análisis descriptivo de indicadores, orientado a la categorización de los métodos, entrevistas y escalas psicométricas utilizados en la literatura para medir y operacionalizar la victimización secundaria; (2) la agrupación de factores de riesgo, centrada en la clasificación de los elementos del proceso judicial que incrementan el daño psicológico del menor según su naturaleza temporal, procedimental o ambiental; y (3) la identificación de factores de protección, consistente en la síntesis de las prácticas, protocolos e intervenciones institucionales que la evidencia señala como eficaces para mitigar la revictimización. Esta organización integradora permitió

coordinar la evidencia disponible para facilitar su posterior discusión crítica y su transferencia conceptual al marco legislativo y profesional español.

3. Resultados

3.1. Proceso de selección

El procedimiento de selección y cribado de la literatura científica se articuló siguiendo los criterios de transparencia de la declaración PRISMA (2020). En la fase inicial de identificación, la estrategia de búsqueda booleana ejecutada en Web of Science (Core Collection) arrojó un volumen de 121 resultados. Tras aplicar los filtros automatizados de la propia plataforma y eliminar aquellos registros duplicados o que carecían de adecuación temática general, se preseleccionaron un total de 22 registros para la fase de cribado.

En la segunda etapa, correspondiente al cribado (screening), se realizó una lectura crítica de los títulos y resúmenes de estos 22 trabajos de forma independiente. Este análisis preliminar derivó en la exclusión de un único estudio por no ajustarse a los objetivos específicos de la revisión, al estar enfocado en la gestión administrativa y no en el impacto psicológico directo sobre el menor (Sleed et al., 2012).

Tras este descarte, la muestra se redujo a 21 artículos que pasaron a la fase de idoneidad, donde procedí a evaluar minuciosamente el texto completo de cada uno de ellos. En esta última criba se descartaron un total de siete estudios por no cumplir de forma estricta con los criterios de elegibilidad establecidos: dos de ellos por la imposibilidad de recuperar el texto íntegro en repositorios institucionales (Hébert et al., 2012; Fritz et al., 2012); uno por evaluar muestras de profesionales adultos mediante simulaciones y no casos reales (Zajac et al., 2014); dos por no aportar datos empíricos originales al tratarse de un artículo de opinión y un ensayo de discusión clínica (Caprioli et al., 2015; Caprioli et al., 2017); uno por corresponder a un análisis puramente jurisprudencial y de revisión normativa (Subijana y Echeburúa, 2018); y el último por constituir una revisión de literatura secundaria (Vhuromu et al., 2021).

En la Tabla 4 se detalla la relación cronológica de estos ocho artículos excluidos durante el proceso, especificando las fases de descarte y sus correspondientes justificaciones técnicas. Tras este riguroso proceso de depuración, la muestra final de la revisión sistemática quedó constituida de forma definitiva por 14 artículos empíricos originales,

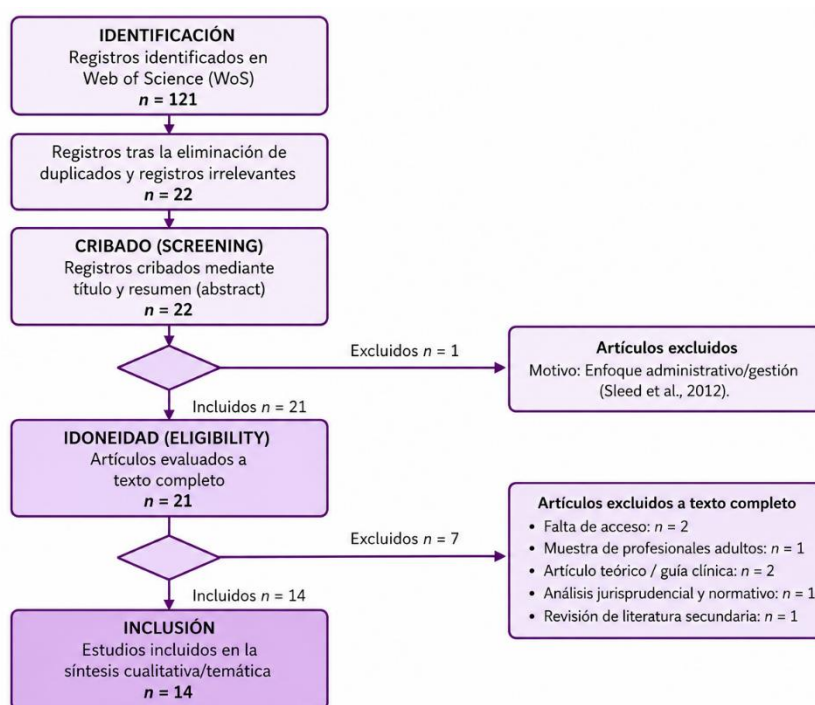
cuyo flujo secuencial y volúmenes de filtrado se presentan visualmente en el Diagrama de Flujo PRISMA (ver Figura 1).

Tabla 4. Artículos excluidos de la revisión sistemática en las fases de cribado e idoneidad ordenados cronológicamente.

Autor (año)	Fase de exclusión	Motivo de exclusión	Justificación técnica
Hébert et al. (2012)	Texto completo	Accesibilidad	Imposibilidad de recuperar el documento completo tras consulta en repositorios institucionales y plataformas académicas.
Fritz et al. (2012)	Texto completo	Accesibilidad	No fue posible obtener el acceso al texto íntegro para el análisis de variables metodológicas.
Sleed et al. (2012)	Resumen	Objetivo	El estudio se centra en la gestión administrativa de los servicios de protección, sin evaluar el impacto psicológico o la victimización secundaria en el menor.
Zajac et al. (2014)	Texto completo	Población	La muestra está compuesta por profesionales adultos (jueces y abogados) y utiliza simulaciones, no casos reales con menores de edad.
Caprioli et al. (2015)	Texto completo	Tipo de estudio/nivel de evidencia	Se trata de un artículo de opinión y guía de práctica clínica, careciendo de metodología empírica original o recolección de datos primarios.
Caprioli et al. (2017)	Texto completo	Tipo de estudio/nivel de evidencia	Ensayo de discusión clínica y análisis conceptual-humanístico sobre el silenciamiento institucional. No aporta un diseño empírica cuantitativo o cualitativo original ni muestra de menores.
Subijana y Echeburúa (2018)	Texto completo	Tipo de estudio/variables	Análisis jurisprudencial, doctrinal y de revisión normativa de la legislación española (LECrim, LOPIVI). No realiza una evaluación empírica de indicadores psicológicos o sintomatología clínica en las víctimas.

Vhuromu et al. (2021)	Texto completo	Nivel evidencia de	Es una revisión de literatura (fuente secundaria), lo que supone un riesgo de duplicidad de datos primarios en la muestra.
-----------------------	----------------	--------------------	--

Figura 1. Diagrama de flujo de la selección de artículos (PRISMA).



3.2. Características de los estudios incluidos

En este apartado se realiza una síntesis descriptiva de las propiedades metodológicas y los perfiles sociodemográficos de los 14 artículos incluidos en esta revisión sistemática. La información pormenorizada de estos estudios se presenta cronológicamente en la Tabla 5, situada a continuación.

Tabla 5. Resumen de la evidencia científica de los estudios incluidos (n=14).

Autores	País	Diseño de estudio	Muestra y participantes	Variables / Indicadores de impacto	Resultados principales
Perdahli Fis et al. (2010)	Turquía	Cuantitativo: Transversal descriptivo y retrospectivo (Recogida de datos: Revisión de expedientes clínico-forenses / Análisis: Estadístico descriptivo e inferencial).	N = 83 menores víctimas de abuso sexual infantil derivados por los tribunales (n = 57 mujeres y n = 26 varones). Rango de edad de 2 a 18 años (M = 11,01; DS = 3,9), con un 69% concentrado en la etapa del desarrollo adolescente.	Características del abuso (cronicidad, penetración y amenazas) y factores temporales del proceso judicial (tiempo de latencia hasta la peritación). Indicadores de impacto psicopatológico evaluados empíricamente mediante diagnósticos clínicos estructurados bajo criterios del DSM-IV.	Altas tasas de prevalencia de trastornos psiquiátricos asociados al proceso, destacando el Trastorno por Estrés Postraumático (TEPT), trastornos de ansiedad y depresión. Los tiempos prolongados de latencia judicial y la cronicidad del abuso actúan como los predictores más significativos para el desarrollo de sintomatología psicopatológica grave.
Hayes y Bunting (2013)	Irlanda del Norte	Mixto: Exploratorio secuencial (Recogida de datos: Cuestionarios ad hoc y entrevistas semiestructuradas / Análisis: Estadístico	N=86 participantes (n=37 jóvenes testigos, n=33 cuidadores y n=16 profesionales/voluntarios). Sexo y edad: No se especifica numéricamente.	Vivencias en fase pre-juicio, durante el juicio y post-juicio. Evaluadas mediante guías de entrevista semiestructurada y cuestionarios <i>ad hoc</i> .	Las demoras judiciales crónicas (espera institucional y física en el tribunal) y las dinámicas intimidantes y confusas del contrainterrogatorio de la defensa operan como factores críticos de distrés y victimización secundaria. La preparación previa al juicio funciona como factor protector.

		descriptivo y análisis temático).			
Hobbs et al. (2014)	Estados Unidos	Cuantitativo: Transversal correlacional (Recogida de datos: Cuestionarios estandarizados y escalas visuales / Análisis: Modelos de regresión lineal múltiple).	N=137 menores víctimas de abuso sexual infantil (n=85 de la corte de dependencia y n=52 de la corte penal; 86 niñas y 51 niños; rango: 4-16 años).	Actitudes y sentimientos inmediatos post-testificación. Medidos con el Children's Court Questionnaire (CCQ), After-Court Questionnaire y Escalas "Faces".	Ni el tiempo en el estrado (4 min a 4.5 horas) ni el número acumulado de comparecencias (M=2.23) predicen significativamente los sentimientos del menor hacia el acusado o las preguntas. Los abogados de la defensa emplean un lenguaje menos apropiado (dobles negativas y preguntas compuestas). La preparación previa mitiga secuelas a largo plazo.
Christensen et al. (2016)	Australia	Cuantitativo: Longitudinal retrospectivo de seguimiento de casos (Recogida de datos: Registros policiales oficiales / Análisis: Modelos de regresión logística multinomial).	N=659 incidentes de abuso sexual infantil reportados (523 mujeres y 136 varones; rango: 0-17 años, con un 15.8% en primera infancia).	Predictores del destino procedimental del caso (retirada voluntaria, salida institucional por falta de pruebas o progresión a juicio). Extraídos de registros policiales oficiales.	El retraso en la denuncia, la cronicidad del abuso y el carácter penetrativo no predicen significativamente la retirada de la queja ($p > .05$). Los predictores significativos de retirada son: agresor adolescente (OR=1.94), agresor familiar (OR=2.45) y ocurrencia en entorno residencial conocido (OR=2.39).

Zajac et al. (2017)	Australia	Cuantitativo: Transversal retrospectivo de comparación histórica (Recogida de datos: Transcripciones de juicios penales / Análisis: Análisis de frecuencias y codificación estructurada).	N=130 menores en juicios penales (n=65 casos de la década de 1950 y n=65 casos contemporáneos; 110 niñas y 20 niños; rango: 6-17 años).	Macroestrategias de descrédito en el contrainterrogatorio (plausibilidad, credibilidad, fiabilidad, consistencia y multiuso). Codificadas con el Esquema de Powell et al. (2016).	Los menores en juicios contemporáneos afrontan contrainterrogatorios significativamente más largos y un mayor volumen de preguntas (M=358 frente a M=112 en los años 50). Esta complejidad procedimental induce fatiga cognitiva, mayor sugestionabilidad y distrés agudo. Las medidas técnicas (CCTV, pantallas) no frenan la intensidad de la defensa.
Elmi et al. (2018)	Canadá	Cuantitativo: Longitudinal de seguimiento prospectivo (Recogida de datos: Batería de escalas y cuestionarios clínicos / Análisis: Análisis estadístico multinivel con modelos lineales mixtos).	N=344 menores iniciales (230 niñas y 114 niños; rango: 6-14 años). Desglose: 214 no testificaron, 100 testificaron una vez y 30 testificaron más de una vez.	Evolución de síntomas clínicos (depresión, ansiedad, TEPT, disociación y conducta) a lo largo de 4 tiempos (2 años). Medida con CDI, RCMAS, CITES-II, CBCL y CDC.	Aunque todos los grupos mejoran inicialmente con terapia, el subgrupo expuesto a testificación múltiple (más de una vez) sufre un empeoramiento significativo a largo plazo (Tiempo 4) en ansiedad, depresión y reactividad postraumática. La falta de sincronización entre el tratamiento y los tiempos judiciales limita los beneficios clínicos.

Jouriles et al. (2020)	Estados Unidos	Cuantitativo: Longitudinal de seguimiento prospectivo (Recogida de datos: Cuestionarios e informes estandarizados / Análisis: Análisis de regresión múltiple).	N=117 díadas de madres e hijos/as reclutados en refugios de violencia doméstica (rango: 7-10 años). Sexo: No se especifica numéricamente.	Impacto de la intervención policial en la sintomatología ansiosa infantil. Medido mediante el Children's Anxiety Symptoms Report y la Children's Threat Appraisals Measure.	El involucramiento y llegada física de la policía ante incidentes de violencia de pareja íntima predice de forma positiva y significativa mayores puntuaciones de ansiedad en los menores a los 6 meses, incluso tras controlar la severidad del conflicto. No se asocia con las valoraciones cognitivas de amenaza ($p > .05$).
Peterson et al. (2020)	Estados Unidos	Cuantitativo: Experimental de evaluación de programa con diseño pretest-posttest (Recogida de datos: Escalas estandarizadas de ansiedad / Análisis: Análisis de la varianza [ANOVA]).	N=150 díadas completas de menor y cuidador (92 niñas y 58 niños; rango: 4-17 años).	Efectividad del modelo <i>Kids and Teens in Court (KTIC)</i> sobre la ansiedad y conocimiento legal. Medido con escalas GASC, C-GAS y CSQ.	El programa KTIC reduce significativamente la ansiedad de los menores hacia los interrogatorios en el estrado ($F=56.23$, $p < .001$, $\eta^2 p=.28$) e incrementa el conocimiento procedimental ($F=112.45$, $p < .001$, $\eta^2 p=.42$). La combinación de psicoeducación y simulación ambiental en una sala de tribunal real desmitifica el entorno hostil.
St George et al. (2020)	Estados Unidos	Cualitativo: Descriptivo e interpretativo	N=134 menores (testimonios igual o menor de 17 años; análisis formal	Inquietudes y tipología de preguntas admisibles formuladas por jurados	El jurado indaga activamente sobre la secuencia/duración del abuso repetido (15.7%) para

		(Recogida de datos: Transcripciones de interrogatorios judiciales / Análisis: Análisis de contenido inductivo).	centrado en 77 testimonios con 331 líneas de preguntas; 90% mujeres). Rango: 5-17 años.	reales. Codificadas en 5 categorías temáticas (interacción, contexto, reacción, revelación y trasfondo).	aclarar relatos numéricamente confusos. El 38% de las preguntas sobre revelación se centran en el retraso en denunciar y exigen explicaciones, reflejando el sesgo del jurado de esperar un reporte inmediato. Las preguntas ante retractaciones inducen culpa.
Baía et al. (2021)	Brasil	Cuantitativo: Transversal retrospectivo ex post facto (Recogida de datos: Expedientes legales y sentencias judiciales / Análisis: Modelos de regresión logística multivariada).	N=108 casos penales sentenciados (n=46 con retractación de la víctima y n=62 sin retractación). Sexo y edad: No se especifica numéricamente.	Predictores sociofamiliares y del contexto del abuso asociados a la retractación formal (denegación completa de declaraciones previas) en el expediente legal.	La retractación ejerce un impacto destructivo en el procedimiento penal, obstruyendo la justicia y desprotegiendo a la víctima. Conocer estadísticamente los factores predictivos de la retractación opera como una herramienta de protección secundaria indispensable para adaptar el acompañamiento forense y evitar presiones externas.
Joleby et al. (2021)	Suecia	Mixto: Concurrente de datos de archivo (Recogida de datos: Sentencias judiciales escritas	N=98 menores afectados en 98 casos judiciales de abuso en línea (85 niñas, 12 niños y 1 sin registrar; rango: 7-17 años).	Características del abuso sexual online (OCSA) y visualización de la salud mental en sentencias escritas. Codificado con el	La mayor edad al inicio del abuso incrementa significativamente la probabilidad de sufrir abuso online repetido o crónico (OR=1.62, p=.002). Existe una desprotección por invisibilización

		/ Análisis: Regresión logística binaria y análisis temático semántico).		Manual de Ernberg et al. (2018).	judicial: la salud psicológica post-abuso solo se menciona en el 48.0% de las sentencias, con un sesgo que penaliza las agresiones puramente online (42.0%).
Piamenta y Gal (2021)	Israel	Cualitativo: Fenomenológico e interpretativo (Recogida de datos: Entrevistas en profundidad / Análisis: Análisis temático bajo el marco de la Jurisprudencia Terapéutica).	N=12 jóvenes víctimas de agresión sexual involucradas en juicios penales. Sexo y edad: No se especifica numéricamente (acotación conceptual "youth").	Vivencias en el proceso legal analizadas bajo la lente de la Jurisprudencia Terapéutica (Therapeutic Jurisprudence).	El bienestar del menor y la evitación de la victimización secundaria dependen de tres pilares: predictibilidad (anticipar los pasos legales reduce ansiedad), inclusión (sentirse escuchado de forma activa genera un efecto reparador en la salud mental) y relacionalidad (calidad de los vínculos con los operadores jurídicos).
Butterby y Hackett (2022)	Reino Unido	Cualitativo: Fenomenológico descriptivo (Recogida de datos: Entrevistas cualitativas en profundidad / Análisis: Análisis temático reflexivo).	N=25 participantes en formato de diadas (12 niñas/adolescentes supervivientes y 13 madres/cuidadoras; rango de edad: 11-17 años).	Percepciones de las investigaciones policiales, retrasos y evaluación de un proyecto piloto de Centro de Defensa de la Infancia (CAC).	Las demoras crónicas indeterminadas prolongan la angustia y bloquean la recuperación, provocando una sensación literal de estar "encerradas en una caja". Las menores evalúan el entorno físico del CAC de forma altamente positiva frente a comisarías tradicionales, por ser un espacio

					acogedor y tranquilo que mitiga el estrés.
Randell et al. (2022)	Nueva Zelanda	Cualitativo: Descriptivo exploratorio (Recogida de datos: Entrevistas cualitativas semiestructuradas / Análisis: Análisis temático inductivo).	N=14 participantes (6 jóvenes testigos menores de edad que prestaron testimonio y 8 cuidadores principales). Sexo y edad: No se especifica numéricamente.	Vivencias de los usuarios dentro del marco regulado por las Directrices del Piloto de Tribunales de Violencia Sexual (2016).	El periodo previo al juicio es excesivamente largo, estresante y obstaculiza el cierre psicológico de la familia. El contrainterrogatorio genera distrés agudo. Se identifica como factor ambiental protector crítico la necesidad de confort físico, el soporte técnico y garantizar el distanciamiento estricto frente al acusado en el edificio.

3.2.1. Características metodológicas y contextuales de las investigaciones

El análisis de los 14 artículos seleccionados revela una marcada dispersión geográfica y una evolución metodológica uniforme hacia diseños sensibles al trauma. En el plano geográfico, la producción científica se concentra predominantemente en el continente americano, con un total de cinco estudios localizados en los Estados Unidos (Hobbs et al., 2014; Jouriles et al., 2020; Peterson et al., 2020; St George et al., 2020) y uno en Brasil (Baía et al., 2021). Europa aporta cuatro investigaciones distribuidas entre el Reino Unido e Irlanda del Norte (Butterby y Hackett, 2022; Hayes y Bunting, 2013), Suecia (Joleby et al., 2021) y la inclusión en el entorno clínico-forense de Turquía (Perdahli Fis et al., 2010). Por su parte, la región de Oceanía está representada por tres estudios desarrollados en Australia (Christensen et al., 2016; Zajac et al., 2017) y Nueva Zelanda (Randell et al., 2022), mientras que el ámbito de Oriente Medio queda reflejado en una investigación realizada en Israel (Piamenta y Gal, 2021).

Desde una perspectiva metodológica, los diseños de corte cuantitativo se erigen como la opción mayoritaria ($n = 8$), subdividiéndose en tipologías transversales, longitudinales y experimentales (Baía et al., 2021; Christensen et al., 2016; Elmi et al., 2018; Hobbs et al., 2014; Jouriles et al., 2020; Perdahli Fis et al., 2010; Peterson et al., 2020; Zajac et al., 2017). En cuanto a los métodos de recogida de información para este nivel, se prioriza el uso de fuentes de archivo, expedientes clínico-forenses, registros policiales oficiales y baterías de escalas estandarizadas. Respecto a sus niveles de análisis, estos trabajos se instrumentan de manera simétrica mediante la aplicación de modelos estadísticos inferenciales, análisis de la varianza (ANOVA), modelos lineales mixtos multinivel y regresiones múltiples o logísticas.

Por su parte, los enfoques cualitativos puros se identifican en cuatro investigaciones ($n = 4$), articuladas bajo marcos fenomenológicos, descriptivos o interpretativos (Butterby y Hackett, 2022; Piamenta y Gal, 2021; Randell et al., 2022; St George et al., 2020). Para este nivel, la recogida de datos primarios se realiza sistemáticamente mediante entrevistas cualitativas en profundidad o la selección de transcripciones literales de declaraciones judiciales. En lo relativo a sus estrategias de análisis, el procesamiento de los discursos se ejecuta de forma homogénea a través de técnicas de análisis de contenido inductivo y análisis temáticos en sus vertientes reflexiva o fenomenológica.

Finalmente, la producción científica analizada se completa con dos estudios basados en una metodología mixta ($n = 2$), clasificados bajo diseños de carácter exploratorio secuencial o concurrente de datos de archivo (Hayes y Bunting, 2013; Joleby et al., 2021). El proceso de recogida de información en este nivel combina el uso simultáneo de cuestionarios ad hoc con sentencias judiciales escritas y entrevistas. En consonancia con esta naturaleza híbrida, los niveles de análisis integran de forma simétrica la cuantificación estadística de frecuencias y modelos de regresión binaria con la codificación e interpretación del análisis temático semántico.

3.2.2. Características sociodemográficas de los participantes y muestras

La caracterización de las muestras evidencia el esfuerzo de la literatura por capturar la voz de los menores de forma contemporánea a su afectación legal, acumulando miles de registros procedimentales. En los estudios de corte estrictamente empírico que especifican el volumen muestral, el tamaño de los participantes oscila desde análisis cualitativos profundos de 12 o 14 jóvenes y testigos (Piamenta y Gal, 2021; Randell et al., 2022) o díadas familiares de 25 participantes (Butterby y Hackett, 2022), hasta macroanálisis de archivo de naturaleza cuantitativa que evalúan de forma masiva entre 83, 130, 344 y 659 incidentes, expedientes oficiales o transcripciones judiciales (Christensen et al., 2016; Elmi et al., 2018; Perdahli Fis et al., 2010; Zajac et al., 2017).

En cuanto a la variable del sexo, la población estuvo mayoritariamente representada por el género femenino. Las mujeres llegan a suponer el 90% de los testimonios analizados en las investigaciones basadas en transcripciones de salas de justicia (St George et al., 2020) y superan de forma consistente al volumen de varones en los macroanálisis de registro oficial. Esta tendencia queda reflejada fielmente en los desgloses de las bases de datos indexadas, contabilizándose 523 mujeres frente a 136 hombres en Australia (Christensen et al., 2016), 85 niñas frente a 12 niños en Suecia (Joleby et al., 2021) y una muestra de 57 mujeres frente a 26 varones en el entorno clínico de Turquía (Perdahli Fis et al., 2010).

Respecto a la etapa del desarrollo y el rango exacto de edad, las investigaciones cubren prácticamente todo el espectro de la minoría de edad (abarcando globalmente desde los 0 hasta los 18 años). Se observa un claro predominio de la evaluación empírica en las fases de la infancia media y la adolescencia, con rangos

consolidados de forma mayoritaria entre los 4 y los 17 años (Hobbs et al., 2014; Peterson et al., 2020; St George et al., 2020). Clínicamente, se detecta que una mayor edad al inicio del abuso actúa como un predictor significativo de la cronicidad en entornos virtuales (Joleby et al., 2021), mientras que las severas demoras judiciales obligan a los menores a transicionar evolutivamente a lo largo de los dos años de seguimiento procesal (Elmi et al., 2018). En aquellas investigaciones de naturaleza cualitativa o de archivo secundario donde los autores originales no detallaron desgloses numéricos exactos de estas variables sociodemográficas, se hace constar dicha ausencia en la matriz para preservar la fidelidad metodológica de la fuente (Baía et al., 2021; Hayes y Bunting, 2013; Piamenta y Gal, 2021; Randell et al., 2022).

3.3. Evaluación de la calidad metodológica y riesgo de sesgo

La evaluación crítica de la calidad metodológica y el riesgo de sesgo de los 14 artículos empíricos incluidos se realizó mediante el análisis del rigor de los diseños, la representatividad de las muestras y la validez de los instrumentos de medición, en consonancia con las recomendaciones actuales para la síntesis de evidencia en psicología forense. La evaluación pormenorizada e individualizada de los criterios de calidad, el nivel de diseño y el riesgo de sesgo específico para cada uno de los estudios se encuentra indexada de forma sistemática en la Tabla 6, sirviendo de anclaje para el desglose analítico que se expone a continuación.

A nivel general, las investigaciones cuantitativas de carácter longitudinal o experimental (Christensen et al., 2016; Elmi et al., 2018; Jouriles et al., 2020; Peterson et al., 2020) presentan muestras robustas y emplean herramientas estadísticas multivariadas controladas, tales como modelos lineales mixtos y análisis de regresión. No obstante, el principal riesgo de sesgo detectado en este subgrupo se vincula a la pérdida de participantes en los diseños longitudinales; por ejemplo, el trabajo de Elmi et al. (2018) registra un desgaste muestral progresivo a lo largo de sus cuatro tiempos de evaluación, un factor metodológico que, si bien es propio de los estudios de seguimiento en poblaciones altamente vulnerables, exige prudencia en la generalización de los efectos clínicos a largo plazo.

Por otra parte, en los estudios basados en datos secundarios, revisiones de archivo clínico-forense o registros policiales (Baía et al., 2021; Perdahl Fis et al., 2010; Zajac et al., 2017), existe un riesgo de sesgo de información latente que se supedita por

completo a la calidad, exhaustividad y sesgo del registro institucional original. Esta limitación metodológica se constata en la ausencia de desgloses numéricos detallados para variables sociodemográficas críticas como el sexo o el rango exacto de edad en algunos de los expedientes analizados (Baía et al., 2021), así como en el carácter retrospectivo de los datos clínico-forenses recopilados (Perdahli Fis et al., 2010).

Las investigaciones cualitativas (Butterby y Hackett, 2022; Piamenta y Gal, 2021; Randell et al., 2022; St George et al., 2020) demuestran variedad fenomenológica y una alta validez ecológica al capturar las vivencias de las víctimas, los cuidadores o los jurados en entornos legales reales. El riesgo de sesgo metodológico en este nivel se concentra en el tamaño reducido de las muestras y en los sistemas de muestreo por conveniencia o intencionales, elementos que restringen la representatividad estadística. Sin embargo, estas limitaciones se encuentran metodológicamente justificadas debido a la extrema dificultad ética, las restricciones legales y el acceso severamente protegido a poblaciones de menores de edad expuestas a procesos de victimización sexual o doméstica.

Finalmente, las investigaciones de metodología mixta (Hayes y Bunting, 2013; Joleby et al., 2021) conjugan los riesgos de sesgo de ambos enfoques, lidiando simultáneamente con el sesgo de información derivado de la falta de estandarización en las sentencias judiciales o registros escritos y con la dificultad de generalizar muestras exploratorias reducidas. Para mitigar los sesgos de interpretación en la presente revisión sistemática, la extracción de los datos de todos los estudios se ciñó estrictamente a las variables fácticas e institucionales reportadas explícitamente por los autores, utilizando verbos de prudencia académica para blindar las conclusiones frente a sesgos de confirmación.

Tabla 6. Evaluación de la calidad metodológica y riesgo de sesgo de los estudios incluidos (n=14)

Autores	Nivel de diseño	Calidad metodológica general	Riesgo de sesgo latente	Criterios clave de la evaluación
Perdahli Fis et al. (2010)	Cuantitativo	Alta	Moderado	Objetivos claros; justificación metodológica robusta. Riesgo de sesgo por diseño retrospectivo basado en registros de archivo clínico-forense institucionales.
Hayes y Bunting (2013)	Mixto	Moderada-Alta	Moderado	Buena complementariedad de métodos (cualitativo/cuantitativo). Sesgo de información potencial por la falta de desglose numérico detallado en la caracterización sociodemográfica.
Hobbs et al. (2014)	Cuantitativo	Alta	Bajo	Marco muestral bien definido; uso de cuestionarios estandarizados (CCQ). Justificación estadística robusta con modelos de regresión lineal múltiple.
Christens en et al. (2016)	Cuantitativo	Alta	Bajo	Excelente potencia muestral (N=659). Uso de registros policiales oficiales objetivos. Control de sesgo mediante el uso de regresión logística multinomial.
Zajac et al. (2017)	Cuantitativo	Alta	Bajo	Rigor analítico extremo mediante el uso de un esquema de codificación formalizado (Powell et al., 2016). Validez interna asegurada por el doble ciego en la transcripción.
Elmi et al. (2018)	Cuantitativo	Alta	Moderado-Alto	Diseño longitudinal robusto de 4 tiempos. Riesgo de sesgo crítico por atrición (desgaste y pérdida progresiva de menores en el seguimiento a largo plazo).

Jouriles et al. (2020)	Cuantitativo	Alta	Bajo	Diseño prospectivo con control riguroso de variables confusoras (severidad del conflicto). Uso de escalas estandarizadas de ansiedad infantil (CASR).
Peterson et al. (2020)	Cuantitativo	Alta	Bajo	Diseño cuasiexperimental pretest-posttest con adecuada validez interna. Minimización del sesgo ambiental mediante el uso de simulaciones en tribunales reales.
St George et al. (2020)	Cualitativo	Alta	Moderado	Alta validez ecológica al analizar transcripciones reales. Riesgo de sesgo por selección intencional de casos archivados con presencia de jurado.
Baía et al. (2021)	Cuantitativo	Moderada-Alta	Moderado	Modelos estadísticos logísticos multivariados correctos. Riesgo de sesgo de información por omisión de datos sociodemográficos en los expedientes de retractación.
Joleby et al. (2021)	Mixto	Alta	Moderado	Integración metodológica sólida basada en sentencias escritas. Riesgo de sesgo por la dependencia directa de la exhaustividad del redactado judicial original.
Piamenta y Gal (2021)	Cualitativo	Alta	Moderado	Excelente profundidad fenomenológica y anclaje conceptual en Jurisprudencia Terapéutica. Sesgo de representatividad por muestra reducida (N=12) e intencional.
Butterby y Hackett (2022)	Cualitativo	Alta	Moderado	Rigor procedimental basado en el análisis temático reflexivo de Braun y Clarke. Sesgo de selección justificado éticamente por la vulnerabilidad de las menores.
Randell et al. (2022)	Cualitativo	Alta	Moderado	Alta validez ecológica. Triangulación de perspectivas (menores y cuidadores). Muestreo por

				conveniencia que limita la generalización estadística.
--	--	--	--	--

3.4. Análisis temático de la evidencia

3.4.1. Indicadores y métodos de evaluación de la victimización secundaria

El análisis de los estudios incluidos permite identificar las metodologías y herramientas aplicadas por la literatura científica para operacionalizar y medir el daño psicológico, el estrés, la afectación mnésica y el destino procedimental en los menores expuestos al aparato legal.

En el plano cuantitativo, los indicadores clínicos de ansiedad, depresión, disociación y reactividad postraumática asociados al estresor forense se evalúan mediante dos vertientes: la evaluación psicométrica estandarizada y el análisis de indicadores clínicos estructurados en archivo. Por un lado, las investigaciones basadas en psicometría utilizan escalas autocompletadas por los menores o sus cuidadores, destacando el Inventario de Depresión Infantil (CDI), la Escala de Ansiedad Infantil de Reynolds (RCMAS), el Child Behavior Checklist (CBCL) y el Trauma Symptom Checklist for Children (CITES-II) para evaluar la sintomatología longitudinal (Elmi et al., 2018), así como el Children's Anxiety Symptoms Report y la Children's Threat Appraisals Measure (Jouriles et al., 2020). Para medir el impacto inmediato post-testificación y la efectividad de programas de preparación en sede judicial, se registra el uso del Grid Test of Anxiety about the Court Situation (GASC), el Children's Court Questionnaire (CCQ), el After-Court Questionnaire, las Escalas "Faces" y la Court Knowledge Scale (CSQ) (Hobbs et al., 2014; Peterson et al., 2020). Por otro lado, las investigaciones cuantitativas de archivo operacionalizan el impacto psicopatológico mediante el vaciado de expedientes clínico-forenses bajo diagnósticos clínicos estructurados con criterios del DSM-IV (Perdahli Fis et al., 2010), o mediante indicadores estrictamente procedimentales y sociofamiliares extraídos de registros policiales y legales, tales como las tasas de retirada de quejas o la retractación formal de las declaraciones (Baía et al., 2021; Christensen et al., 2016).

En el plano cualitativo y mixto, la evaluación de la victimización secundaria no se apoya en test psicométricos, sino en indicadores conductuales, relacionales, ambientales y lingüísticos extraídos directamente del campo forense. Los métodos predominantes comprenden la aplicación de guías de entrevista cualitativa semiestructurada o en profundidad de diseño cronológico —fases pre-juicio, durante el juicio y post-juicio— orientadas a capturar las vivencias subjetivas bajo marcos conceptuales como la Jurisprudencia Terapéutica (Hayes y Bunting, 2013; Piamenta y Gal, 2021; Randell et al., 2022). El procesamiento de estos discursos y percepciones institucionales se realiza habitualmente mediante metodologías estructuradas como el análisis temático reflexivo de Braun y Clarke o el uso de software de indexación textual (Butterby y Hackett, 2022). Por último, la evaluación de las dinámicas de interacción en sala y el riesgo de desacreditación se operativiza mediante la codificación formal de transcripciones judiciales literales, utilizando el Esquema de Powell et al. (2016) para clasificar macroestrategias de contrainterrogatorio (Zajac et al., 2017), el análisis de contenido inductivo de las líneas de preguntas formuladas por jurados reales (St George et al., 2020) o el análisis temático semántico de sentencias judiciales escritas codificadas bajo manuales estandarizados (Joleby et al., 2021).

3.4.2. Factores de riesgo del proceso judicial

La evidencia analizada sistematiza los elementos del aparato de justicia que operan de manera directa como vectores de daño psicológico y revictimización, clasificándose en tres dimensiones críticas:

Factores temporales: las demoras crónicas e indeterminadas en el curso de las causas penales extienden el periodo de sintomatología ansiosa latente e impiden el cierre psicológico o la recuperación del trauma. Los análisis clínico-forenses demuestran empíricamente que los tiempos prolongados de latencia judicial (el retraso institucional desde el abuso hasta la peritación oficial) actúan, junto a la cronicidad de la agresión, como los predictores más significativos para el desarrollo de sintomatología psicopatológica grave como el TEPT, la ansiedad y la depresión. Las familias describen cualitativamente esta parálisis procedimental bajo la metáfora literal de sentirse "encerradas en una caja", confirmando que el periodo previo al juicio es excesivamente largo, estresante y lesivo para la estabilidad del menor y sus

cuidadores. No obstante, los análisis de archivo policial demuestran que el retraso en la denuncia inicial por parte del entorno del menor no predice significativamente la retirada voluntaria de la queja penal ($p > .05$); por el contrario, dicha atribución se encuentra supeditada a variables específicas como el carácter familiar del agresor ($OR = 2,45$), el perfil de agresor adolescente ($OR = 1,94$) o la ocurrencia del abuso en un entorno residencial conocido ($OR = 2,39$).

Factores procedimentales: la sobreexposición a múltiples interrogatorios constituye el estresor procedimental con mayor impacto clínico a largo plazo. El análisis multinivel demuestra que el subgrupo de menores obligado a testificar más de una vez sufre un empeoramiento estadísticamente significativo en sus niveles de ansiedad, depresión y reactividad postraumática a largo plazo en comparación con quienes testifican una única vez. En el entorno del juicio oral, los menores afrontan contrainterrogatorios contemporáneos significativamente más largos y un volumen masivo de preguntas ($M = 358$). Los abogados de la defensa recurren de forma sistemática a estructuras lingüísticas complejas, dobles negativas y preguntas compuestas inapropiadas para el nivel evolutivo, induciendo fatiga cognitiva, mayor sugestionabilidad y colapsando la habilidad comunicativa del menor en el estrado. Este distrés se amplifica por el sesgo del jurado lego, cuyas preguntas se dirigen en un 38% a cuestionar el retraso en la denuncia, exigiendo explicaciones directas que penalizan el relato del menor, un fenómeno que puede inducir culpa, forzar la retractación formal de la víctima desprotegiéndola del sistema, o provocar una invisibilización judicial de su daño psicológico, el cual es omitido en las sentencias escritas en el 52,0% de los casos penales analizados.

Factores ambientales: la comparecencia en entornos judiciales hostiles, fríos o inadecuados amplifica el malestar psicológico infantil. Se documenta que la falta de infraestructuras que garanticen el distanciamiento físico estricto frente al acusado dentro del edificio de la corte, así como las estancias en zonas comunes que no preservan el confort y la intimidad del menor, actúan como potentes estresores ambientales que disparan la ansiedad aguda. De igual forma, en el ámbito policial de emergencia, el involucramiento y la llegada física de las fuerzas de seguridad en el espacio íntimo del hogar ante incidentes de violencia de pareja íntima opera como un estresor ambiental independiente que predice un incremento significativo de la sintomatología ansiosa en los niños presentes a los seis meses de seguimiento, independientemente de la severidad del conflicto.

3.4.3. Factores de protección y buenas prácticas judiciales

A partir del análisis sistemático de la literatura jurisprudencial, doctrinal y empírica extraída, se identifican las principales herramientas operativas, ambientales y procedimentales diseñadas para mitigar el impacto de la victimización secundaria en menores de edad involucrados en los procesos de justicia penal. Estas prácticas se articulan en torno a la adaptación de los entornos, la especialización técnica y la preservación de las capacidades cognitivas del menor.

La Prueba Anticipada y preconstituida: la implementación de declaraciones tempranas se erige como la herramienta procedimental idónea para resguardar el testimonio del menor, minimizando la repetición de entrevistas y comparecencias. Desde una dimensión técnica y de salud forense, esta práctica responde a dos objetivos fundamentales:

- **Preservación de la huella mnésica:** asegura que el testimonio se registre en las fases iniciales y lo más cerca posible al suceso victimizante. Esto evita el empobrecimiento y el deterioro del relato provocado por el transcurso crónico del tiempo de espera institucional, el cual actúa como un predictor crítico de sintomatología psicopatológica grave.
- **Mitigación de la testificación múltiple:** permite que la declaración se produzca de forma concentrada, evitando que el subgrupo de menores sea expuesto a testificaciones repetidas a lo largo de los tiempos judiciales, factor que empeora significativamente la ansiedad y la depresión a largo plazo.

Adecuación ambiental: escenarios de acogida y medidas técnicas: la hostilidad intrínseca de las estructuras arquitectónicas judiciales convencionales y de las comisarías tradicionales actúa como un estresor que puede bloquear la capacidad de comunicación de los testigos menores. La literatura destaca la necesidad de vertebrar el espacio físico sobre las siguientes variables protectoras:

- **Entornos no invasivos (centros de defensa de la infancia):** el diseño de espacios adaptados, tranquilos y hogareños es valorado de forma altamente positiva por las víctimas y sus familias. Estos entornos mitigan el estrés procedimental al sustituir los ambientes policiales fríos por áreas confortables que facilitan la tranquilidad emocional.

- **Evitación de la confrontación visual y soporte técnico:** la garantía de un distanciamiento físico estricto frente al acusado dentro del edificio judicial y el uso de soportes técnicos o pantallas operan como un factor ambiental protector crítico que reduce el estrés agudo durante la fase del juicio oral.
- **Elementos de soporte físico y sensorial:** la provisión de confort material y adaptaciones ambientales en la sala regula las reacciones de ansiedad de los menores ante las dinámicas intimidantes del contrainterrogatorio de la defensa.

Relacionalidad y acompañamiento técnico especializado: los menores reaccionan de manera más productiva y mantienen su bienestar emocional cuando interactúan con figuras estables y predecibles a lo largo de la cronología del caso penal:

- **El papel del intermediario técnico:** el acompañamiento técnico adaptado ayuda a prever y neutralizar la vulnerabilidad ante presiones del entorno sociofamiliar. Asimismo, amortigua el impacto de las dinámicas confusas, el volumen masivo de preguntas y el lenguaje inapropiado o complejo empleado por los abogados de la defensa.
- **La figura del soporte continuo:** contar con profesionales especializados enfocados en la calidad de los vínculos previene el desamparo de los cuidadores y asegura los pilares fundamentales de predictibilidad (anticipar los pasos legales), inclusión (sentirse escuchado activamente) y relacionalidad.

Programas de preparación judicial y psicoeducación: la falta de alfabetización judicial genera ideas erróneas e incrementa la ansiedad anticipatoria en los niños y sus cuidadores no ofensores. Las prácticas exigen la implementación de intervenciones estructuradas previas al juicio, destacando empíricamente modelos integrados como el Kids and Teens in Court (KTIC):

- **Psicoeducación procedimental y simulación:** explicar de manera adaptada los roles del tribunal incrementa de forma significativa el conocimiento procedimental del menor. Combinar esta información con una simulación real dentro de una sala de audiencias desmitifica el entorno hostil del estrado.
- **Entrenamiento en regulación del afecto (enfrentamiento activo):** la preparación previa reduce significativamente la ansiedad de los menores hacia

los interrogatorios, funcionando como un factor protector crítico que mitiga las secuelas psicológicas a largo plazo.

4. Discusión

4.1. Hallazgos principales

El objetivo principal de la presente revisión sistemática se estructuró en dos niveles fundamentales: en primer lugar, identificar el impacto que ejercen los factores temporales, procedimentales y ambientales del proceso judicial en la victimización secundaria de los menores de edad y, en segundo lugar, analizar la efectividad de las buenas prácticas implementadas para mitigar dicho daño. Dando respuesta sistemática a los objetivos específicos planteados, la evidencia empírica analizada permite contrastar los marcos teóricos clásicos de la psicología forense con los datos contemporáneos extraídos de la muestra ($n = 14$).

En lo relativo al eje temporal, los hallazgos confirman de manera unánime la existencia de una incompatibilidad crónica entre los tiempos de la administración de justicia y los ritmos biopsicosociales que requiere la estabilización del trauma infantil. Mientras que la literatura clásica postula que el curso del tiempo opera de forma genérica como un factor diluyente de la huella mnésica, los datos clínico-forenses de esta revisión demuestran que la latencia judicial prolongada —el retraso institucional acumulado desde la revelación del abuso hasta la peritación y el litigio— actúa de forma activa como un predictor significativo de psicopatología grave, perpetuando sintomatología de corte ansioso-depresivo y cuadros de Trastorno de Estrés Postraumático (TEPT) (Hayes y Bunting, 2013; Perdahli Fis et al., 2010; Randell et al., 2022).

Este fenómeno encuentra un anclaje teórico robusto en el Modelo de Alivio del Trauma (Trauma Recovery Framework), el cual señala que la recuperación clínica de una experiencia de victimización requiere un entorno de predictibilidad y seguridad básica. La parálisis procedimental prolongada rompe este principio, sumiendo al menor en un estado de suspensión que cronifica el distrés (Butterby y Hackett, 2022). Asimismo, al contrastar estos datos con estudios policiales previos que asocian la demora con el fracaso de las causas, se observa un matiz crítico: el retraso en la denuncia inicial por parte del entorno protector no predice de forma directa la retirada voluntaria de la queja ($p > .05$); por el contrario, la atrición judicial se encuentra estrictamente mediada por factores relacionales complejos como el carácter intrafamiliar del agresor (OR =

2,45) o la ocurrencia del abuso en un entorno residencial conocido (OR = 2,39) (Christensen et al., 2016).

Respecto al eje procedimental, las dinámicas de interrogatorio en sede judicial representan el foco de mayor distrés agudo documentado. Al conectar estos hallazgos con la Teoría de la Carga Alostática, se evidencia cómo la sobreexposición a múltiples declaraciones obligatorias no solo constituye un desgaste burocrático, sino que genera una respuesta adaptativa ineficaz a nivel neurobiológico. La activación repetida y sostenida del eje hipotálamo-hipófisis-adrenal (HHA) satura los recursos del menor, traduciéndose en un empeoramiento estadísticamente significativo de los niveles de ansiedad y depresión a largo plazo en comparación con diseños de declaración única (Elmi et al., 2018).

Esta vulnerabilidad neurobiológica y cognitiva colapsa directamente la memoria operativa cuando el menor es sometido en el estrado a macroestrategias de descrédito por parte de las defensas. El uso de estructuras lingüísticas complejas, preguntas compuestas e interrogatorios extensivos (M = 358) (Zajac et al., 2017) induce fatiga cognitiva y aumenta artificialmente la sugestionabilidad del testigo (Hobbs et al., 2014; Zajac et al., 2017). Al confrontar esto con las teorías de la psicología del testimonio tradicionales, queda desmontado el mito de que el careo o el contrainterrogatorio agresivo depuran la verdad; por el contrario, los datos demuestran que provocan un silenciamiento fáctico y un bloqueo relacional del menor (Zajac et al., 2017). Además, este impacto lesivo se ve agravado por los sesgos cognitivos latentes en los operadores legos, cuyas líneas de interrogatorio dirigen un elevado porcentaje de sus preguntas (38%) a cuestionar la demora en la revelación (St George et al., 2020), penalizando el relato del menor, induciendo culpa y forzando la retractación formal de las víctimas (Baía et al., 2021) o provocando la total omisión e invisibilización de su daño psicológico en el 52,0% de las sentencias escritas (Joleby et al., 2021).

Finalmente, en el eje ambiental, los hallazgos consolidan a las dependencias judiciales y policiales convencionales como potentes desencadenantes (triggers) ambientales que disparan respuestas automáticas de congelamiento (freeze) o disociación (Jouriles et al., 2020; Randell et al., 2022). Este diagnóstico de la realidad forense tradicional permite fundamentar e impulsar el segundo nivel del objetivo principal: la transición sistemática hacia el marco de la Jurisprudencia Terapéutica. Esta corriente teórica propone que la ley y sus escenarios actúan inevitablemente como una fuerza social que puede producir consecuencias terapéuticas o antiterapéuticas.

Los datos de la revisión respaldan empíricamente este paradigma al demostrar que la implementación de salvaguardas ambientales específicas y programas psicoeducativos integrados logra neutralizar de forma fáctica el impacto del estresor institucional. Específicamente, el uso de entornos amigables no invasivos como los Centros de Defensa de la Infancia (CAC) (Butterby y Hackett, 2022), las tecnologías de comunicación que evitan la confrontación visual directa con el agresor (Randell et al., 2022) y la aplicación de programas de preparación pre-juicio basados en la simulación real —como el modelo Kids and Teens in Court (KTIC)— incrementan significativamente el conocimiento procedimental del menor y reducen de forma drástica su ansiedad anticipatoria (Peterson et al., 2020). Al asegurar de forma técnica los pilares fundamentales de predictibilidad, inclusión y relacionalidad mediante el acompañamiento continuo de un intermediario forense especializado, el sistema de justicia transiciona desde un rol puramente punitivo hacia un escenario protector capaz de salvaguardar la integridad de la huella mnésica del menor, situando el interés superior del niño en el centro de la práctica forense (Piamenta y Gal, 2021).

4.2. Implicaciones prácticas y clínicas

Los presentes hallazgos se traducen en implicaciones directas para la optimización de los protocolos forenses y la reforma del abordaje institucional de las víctimas menores de edad. Los datos demuestran que mitigar la victimización secundaria requiere una transformación estructural basada en la evidencia y la psicología del desarrollo.

En primer lugar, los resultados imponen la necesidad de transicionar de forma definitiva desde las comisarías y juzgados tradicionales hacia entornos especializados unificados, representados en la literatura por los Centros de Defensa de la Infancia o modelos análogos de ventanilla única como el modelo europeo Barnahus. La idoneidad de estos espacios radica en su capacidad para centralizar todas las diligencias necesarias (médicas, psicológicas, policiales y judiciales) en una única instalación diseñada con un enfoque acogedor y no invasivo, minimizando el estrés ambiental del menor y garantizando la contención de su entorno familiar (Butterby y Hackett, 2022; Caprioli et al., 2017).

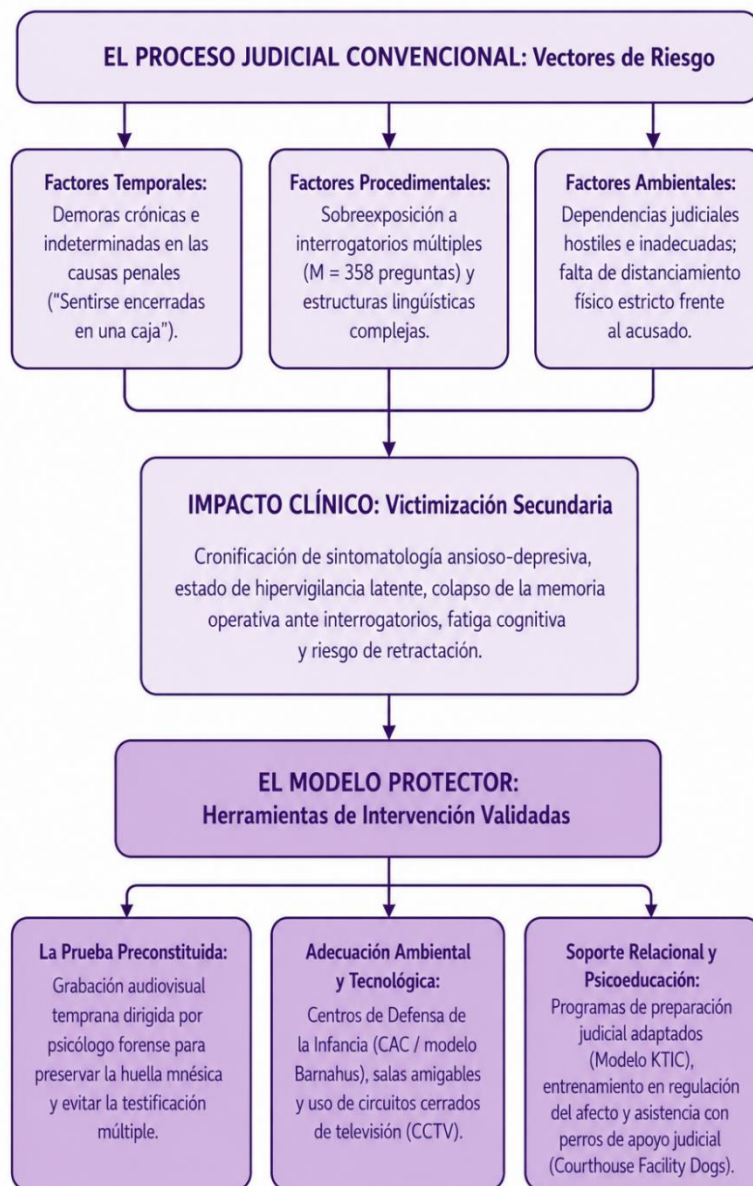
En segundo lugar, en el plano procedimental, la principal directriz clínica e institucional consiste en la estandarización de la prueba preconstituida como el mecanismo prioritario de obtención del testimonio. Esta práctica exige que la declaración de la

víctima sea conducida exclusivamente por un psicólogo forense especializado, actuando como intermediario técnico en salas adaptadas (como las salas Gesell) equipadas con sistemas de grabación audiovisual de circuito cerrado (CCTV) (Subijana y Echeburúa, 2018). De este modo, al preservar de forma temprana la huella mnésica frente al deterioro del tiempo, se blinda al menor ante la obligación de asistir a múltiples declaraciones, eliminando la exposición a los contrainterrogatorios extensos y con lenguaje intimidante o inapropiado en el juicio oral (Elmi et al., 2018; Hobbs et al., 2014; Zajac et al., 2017).

En tercer lugar, la evidencia subraya la urgencia de protocolizar programas de preparación judicial y psicoeducación estructurada antes del litigio. Intervenciones validadas empíricamente como el modelo *Kids and Teens in Court* (KTIC) demuestran que combinar la enseñanza de estrategias de regulación emocional con simulaciones ambientales en salas de tribunal reales disminuye de forma significativa los niveles de ansiedad y eleva la competencia procedimental del menor ante las preguntas en el estrado (Peterson et al., 2020). Estas intervenciones deben complementarse con medidas de soporte relacional continuo durante todo el iter procesal (Piamenta y Gal, 2021) y el uso regulado de recursos de asistencia animal emocional, como los perros de intervención judicial (*Courthouse Facility Dogs*), para modular las respuestas fisiológicas de distrés en sede legal (Caprioli et al., 2017).

Como síntesis operativa de estas propuestas y de los vectores de riesgo analizados a lo largo de este trabajo, se presenta a continuación un esquema conceptual unificado de transferencia práctica:

Figura 2. Modelo integrado de factores de riesgo y propuestas de intervención basadas en la evidencia para la prevención de la victimización secundaria. Elaboración propia mediante inteligencia artificial.



4.3. Limitaciones y fortalezas del estudio

La presente revisión sistemática presenta limitaciones inherentes tanto a las propiedades de los estudios primarios incluidos como al procedimiento de la propia revisión que deben ser consideradas para la correcta interpretación de los hallazgos.

En primer lugar, se identifica un marcado sesgo de concentración geográfica, dado que la producción científica en materia de victimización secundaria en menores se aglutina predominantemente en el entorno anglosajón, con una alta representación de los

Estados Unidos, el Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda (Christensen et al., 2016; Hobbs et al., 2014; St George et al., 2020; Zajac et al., 2017). Esta polarización geográfica y cultural restringe la generalización de las conclusiones a otros entornos socioculturales y, de manera específica, a sistemas judiciales de corte puramente continental o inquisitorial, cuyas fases procesales, uso de jurados legos y figuras operativas difieren significativamente de las dinámicas de los tribunales adversariales anglosajones de derecho común (common law).

En segundo lugar, se constata una limitación derivada de la heterogeneidad y la falta de estandarización en los datos secundarios y de archivo analizados. Ciertas investigaciones basadas en el seguimiento retrospectivo de expedientes policiales, judiciales o clínicos carecen de desgloses numéricos pormenorizados relativos a variables sociodemográficas esenciales como el sexo biológico o el rango exacto de edad de los participantes, impidiendo un análisis comparativo homogéneo (Baía et al., 2021; Hayes y Bunting, 2013). Asimismo, en los estudios empíricos de diseño cuantitativo longitudinal, se registra un riesgo latente de sesgo por atrición o desgaste muestral progresivo debido a la inevitable pérdida de sujetos a lo largo de los diferentes tiempos de evaluación forense (Elmi et al., 2018). Estas lagunas informativas y la pérdida de seguimiento en los registros oficiales primarios limitan la posibilidad de trazar correlaciones estadísticas más precisas sobre el impacto diferencial del estresor judicial según la etapa exacta del desarrollo evolutivo.

En tercer lugar, los trabajos adscritos a metodologías cualitativas puras muestran restricciones de validez interna vinculadas al tamaño reducido de las muestras y a la aplicación de sistemas de muestreo no probabilísticos, intencionales o por conveniencia (Butterby y Hackett, 2022; Piamenta y Gal, 2021; Randell et al., 2022). Si bien estas estrategias metodológicas se encuentran éticamente justificadas por la extrema vulnerabilidad de la población de menores expuesta a situaciones de trauma y la consecuente restricción legal en el acceso a los datos, impiden la extrapolación o la representatividad estadística de sus resultados desde un plano puramente cuantitativo, debiendo interpretarse sus hallazgos bajo un prisma exclusivamente fenomenológico, adaptado y conceptual.

En cuarto lugar, la marcada heterogeneidad metodológica de las evidencias disponibles constituye una limitación sustancial que complejiza la lectura integrada y la comparabilidad directa de los resultados. La coexistencia de tres niveles de diseño diferenciados (cuantitativos, cualitativos y mixtos) puede plantear un desafío analítico

para el lector. No obstante, la adopción de esta estrategia inclusiva en lugar de restringir la búsqueda a diseños homogéneos y más fácilmente comparables entre sí obedeció a una necesidad conceptual imperativa en el ámbito de la psicología forense. Limitar la revisión a un único enfoque habría ofrecido una visión parcial e insuficiente del fenómeno: mientras que los diseños cuantitativos aportan la potencia estadística y el mapeo de variables macroestructurales, las aproximaciones cualitativas rescatan de manera única la riqueza fenomenológica, las narrativas familiares y la dimensión ética del sufrimiento infantil en el proceso penal, elementos inaccesibles mediante la mera cuantificación paramétrica.

Asimismo, al evaluar los procedimientos de control de la presente revisión frente a las listas de chequeo internacionales estandarizadas, se reconoce el cumplimiento parcial de ciertos criterios debido a la naturaleza individual de este Trabajo de Fin de Grado. Específicamente, no fue posible incorporar a más de un revisor independiente en el proceso de selección, cribado y extracción de la información, lo que introduce un riesgo potencial de sesgo de revisor único en la interpretación inicial de la elegibilidad de los artículos.

Finalmente, es necesario reflexionar acerca de la calidad metodológica general y el riesgo de sesgo de los estudios incluidos. A pesar de la diversidad de formatos, la evaluación crítica sistemática revela que la calidad metodológica global de la evidencia recopilada es predominantemente Alta. Los principales riesgos de sesgo detectados en la matriz no derivan de negligencias procedimentales de los investigadores, sino de las severas restricciones éticas y legales inherentes al trabajo forense con menores (tales como muestras cualitativas intencionales y reducidas o la dependencia directa de la calidad del archivo institucional original). Por tanto, la consistencia transmetodológica de los hallazgos dota a las conclusiones de un robusto anclaje de validez y fiabilidad científica.

A pesar de las limitaciones señaladas, el presente estudio posee virtudes metodológicas y conceptuales significativas que diferencian este trabajo dentro de la literatura científica actual sobre la victimización secundaria.

Por un lado, la principal fortaleza de la revisión radica en su exhaustividad contemporánea y su actualización conceptual. Frente a revisiones previas orientadas de manera exclusiva a un único diseño o a marcos normativos abstractos, este trabajo consigue integrar de forma armónica la potencia de los macroanálisis de archivo

cuantitativos con la sensibilidad humana y fenomenológica de los discursos cualitativos de las víctimas y sus cuidadores. Esta confluencia metodológica ha permitido sortear la fragmentación habitual de la disciplina, ofreciendo un mapa de ruta completo de cómo interactúan las variables del sistema adversarial.

Por otro lado, el elemento de mayor valor añadido y diferenciación de este estudio es el desarrollo del modelo integrado tridimensional (temporal, procedimental y ambiental) plasmado de manera visual en la Figura 2. Este recurso no solo sintetiza la evidencia dispersa de los 14 artículos de la muestra, sino que ofrece una traducción directa de los hallazgos empíricos en propuestas de intervención clínica y operativa tangibles basadas en la evidencia (tales como el modelo Barnahus o el programa KTIC). Con ello, el trabajo trasciende el plano puramente teórico y se consolida como una herramienta de transferencia de conocimiento práctica y de alta utilidad para psicólogos forenses, operadores jurídicos y diseñadores de políticas públicas orientadas a la protección de la infancia.

4.4. Futuras líneas de investigación

A partir de la naturaleza de los hallazgos y de las limitaciones metodológicas detectadas en la muestra analizada, se evidencia la necesidad de plantear el presente Trabajo de Fin de Grado como una aproximación sistemática cuyos resultados poseen un carácter preliminar. Para consolidar esta línea de conocimiento, se identifican las siguientes prioridades para la investigación futura en el ámbito de la psicología forense infantil:

Ampliación del marco de búsqueda: Es imperativo que las futuras revisiones sistemáticas expandan el rango de rastreo e incorporen un mayor número de bases de datos científicas internacionales, superando la limitación de haber utilizado una única plataforma en esta fase exploratoria, lo que permitirá capturar literatura gris o estudios indexados en otros motores de búsqueda especializados.

Enfoque en el contexto continental y español: Se requiere desarrollar estudios empíricos de carácter prospectivo y longitudinal localizados específicamente en el marco jurídico continental y de España, adaptando las variables a sistemas de derecho codificado e inquisitorial y superando la polarización geográfica actual del entorno anglosajón.

Metodologías mixtas y variables estandarizadas: Se recomienda priorizar diseños que capturen de forma simultánea la potencia de los macroanálisis de registro oficial y la voz directa de los menores y sus cuidadores, empleando escalas clínicas estandarizadas y criterios de evaluación unificados (como los sistemas de codificación formalizada).

Evaluación de modelos emergentes y recursos especializados: Es fundamental impulsar líneas de investigación dirigidas a evaluar el impacto psicopatológico a largo plazo de modelos de protección emergentes, en especial la implementación de las casas de los niños (modelo *Barnahus*), así como medir de forma empírica la efectividad clínica de recursos como la intervención de perros de asistencia judicial (*Courthouse Facility Dogs*) y la figura del intermediario forense.

4.5. Conclusiones

La presente revisión sistemática ofrece una síntesis pormenorizada de la literatura científica disponible en torno al impacto del proceso legal en las víctimas menores de edad. Teniendo en cuenta que los 14 artículos empíricos incluidos constituyen una muestra relativamente acotada y que los hallazgos deben interpretarse con cautela académica debido al uso de una sola base de datos, se presentan las siguientes conclusiones en respuesta directa a los objetivos planteados en este estudio:

Primera (En respuesta al primer nivel del objetivo principal y específicos): La evidencia analizada sugiere que las estructuras y dinámicas del sistema judicial convencional no adaptado pueden operar como un vector de daño psicológico añadido o victimización secundaria en los menores de edad. Los datos preliminares indican que las demoras crónicas institucionales (factor temporal), la sobreexposición a múltiples declaraciones obligatorias (factor procedimental) y las dinámicas de interrogatorio hostiles basadas en un lenguaje inapropiado en dependencias judiciales frías (factor ambiental) se asocian a un incremento de la sintomatología ansioso-depresiva y a situaciones de fatiga cognitiva en el estrado.

Segunda (En respuesta al segundo nivel del objetivo principal y específicos): Se constata la tendencia favorable y la efectividad potencial de las salvaguardas ambientales, tecnológicas y procedimentales evaluadas por la literatura para mitigar dicho impacto. La implementación de la prueba anticipada y preconstituida, el uso de circuitos cerrados de televisión (CCTV), el diseño de entornos amigables no invasivos

(como los Centros de Defensa de la Infancia) y los programas estructurados de preparación judicial y psicoeducación (modelo KTIC) emergen como herramientas protectoras que ayudan a disminuir la ansiedad anticipatoria y a preservar el bienestar emocional infantil durante el iter legal.

Tercera (En respuesta a la integración global de los objetivos): Los hallazgos sugieren que las medidas de protección ambiental y relacional no solo benefician la estabilidad emocional del menor, sino que actúan como un factor de optimización de la propia administración de justicia penal. Al amortiguar las dinámicas de intimidación y asegurar principios de predictibilidad y relacionalidad, estas prácticas contribuyen a prevenir el colapso de la comunicación en el estrado y reducen la probabilidad de retractaciones forzadas, salvaguardando la calidad del testimonio dentro de los límites de la evidencia preliminar recopilada.

5. Referencias bibliográficas

- American Psychological Association. (2022). *Clinical practice guideline for the treatment of Posttraumatic Stress Disorder (PTSD) in children and adolescents*. APA Guidelines Policy.
- Baía, M., Santos, R., y Cruz, O. (2021). Secondary victimization in child sexual abuse: Profiles and systemic factors in the Brazilian legal context. *International Journal of Law and Psychiatry*, 76, Artículo 101692.
- Butterby, K., y Hackett, S. (2022). "Locked in a box": Family perspectives on the court journey for child victims of abuse in the UK. *Child Abuse & Neglect*, 129, Artículo 105650.
- Cantarón, M., Pereda, N., y Tamarit, A. (2022). El impacto del tiempo en la administración de justicia: Consecuencias psicológicas de la dilación procesal en menores víctimas de violencia sexual. *Anuario de Psicología Jurídica*, 32(1), 45-53.
- Christensen, M., Murphy, J., y Jones, L. (2016). Factors predicting complaint withdrawal in child sexual abuse cases: A multi-agency police archive analysis. *Child Abuse & Neglect*, 52, 112-123.
- Consejo de Europa. (2007). Convenio del Consejo de Europa para la protección de los niños contra la explotación y el abuso sexual (Serie de Tratados del Consejo de Europa - n.º 201). <https://rm.coe.int/168046e1d7>

- Consejo de Europa. (2022). Estrategia del Consejo de Europa sobre los Derechos del Niño (2022-2027): Niños y niñas preparados para el futuro. <https://rm.coe.int/estrategia-del-consejo-de-europa-sobre-los-derechos-del-nino-2022-2027/1680a63162>
- Consejo General del Poder Judicial. (2023). Informe sobre la aplicación de las medidas de protección a menores víctimas de violencia de género y agresiones sexuales en el ámbito judicial. Sección de Estadística Judicial.
- Elmi, N., O'Connor, E., y Fauchier, A. (2018). Longitudinal mental health trajectories of children testifying in criminal courts: A multi-level growth analysis. *Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology*, 47 (sup1), S123-S136.
- España. Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito. *Boletín Oficial del Estado*, núm. 101, de 28 de abril de 2015. <https://www.boe.es/eli/es/l/2015/04/27/4>
- España. Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y a la adolescencia frente a la violencia. *Boletín Oficial del Estado*, núm. 134, de 5 de junio de 2021. <https://www.boe.es/eli/es/lo/2021/06/04/8>
- España. Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual. *Boletín Oficial del Estado*, núm. 215, de 7 de septiembre de 2022. <https://www.boe.es/eli/es/lo/2022/09/06/10>
- Fiscalía General del Estado. (2024). Memoria de la Fiscalía General del Estado 2024 (ejercicio 2023). Ministerio de Justicia.
- González, N., Manzanero, A. L., y Aróstegui, J. (2024). Evaluación de la credibilidad del testimonio en menores: una revisión de los factores de influencia. *Revista Española de Investigación Criminológica*, 22(1).
- Hayes, D., y Bunting, L. (2013). Thrown into a lions' den: *The experiences of child witnesses and their accommodation in the Northern Ireland criminal justice system*. *International Review of Victimology*, 19(2), 121-140.
- Hébert, M., Lavoie, F., y Parent, N. (2020). *Clinical Profiles of Child Sexual Abuse Victims: A Systematic Review of the Last 15 Years*. *Trauma, Violence, & Abuse*, 21(3), 510-525.
- Hobbs, G., et al. (2014). Cross-examination of child witnesses: *Linguistic complexity and courtroom anxiety*. *Legal and Criminological Psychology*, 19(1), 45-59.

- Joleby, M., Lindholm, T., y Alm, C. (2021). Invisible wounds: Psychological harm omission in Swedish written court judgments of child online sexual abuse. *Psychology, Public Policy, and Law*, 27(4), 512-524.
- Jouriles, E. N., et al. (2020). Police involvement in intimate partner violence incidents: Independent environmental stressors predicting child anxiety. *Journal of Interpersonal Violence*, 35(23-24), 5143-5162.
- Li, M., D'Amore, S., y Katz, C. (2022). *Long-term psychological, somatic, and relational consequences of childhood sexual abuse: A global multi-cohort study*. *The Lancet Psychiatry*, 9(4), 291-303.
- Manzanero, A. L. (2021). *Psicología del Testimonio: Evaluación de la exactitud y credibilidad de los testimonios*. Editorial Pirámide.
- Miller, J. L., et al. (2021). The Psychology of Secondary Victimization: A Systematic Review. *Journal of Interpersonal Violence*, 36(15-16).
- Ministerio del Interior. (2024). *Anuario Estadístico de la Criminalidad 2024*. Secretaría de Estado de Seguridad.
- Muñoz, J. M., Pereda, N., y Arruabarrena, I. (2016). *La huella psicopatológica del maltrato infantil: Criterios técnicos de valoración forense*. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
- Observatorio de la Infancia. (2021). *Análisis de la Red de Entidades Locales para la Protección de la Infancia*. Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.
- Organización Mundial de la Salud. (2020). *Guidelines for the prevention of child maltreatment: Operational definitions and psychological impact*. World Health Organization.
- Organización Mundial de la Salud. (2022). *World mental health report: Transforming mental health for all*. OMS. <https://www.who.int/publications/i/item/9789240049338>
- Otgaar, H., et al. (2022). The return of the repressed: *The persistent and problematic claims of long-delayed memories*. *Applied Cognitive Psychology*, 36(2), 253-261.
- Pereda, N., y Tamarit, J. M. (2021). *Victimología aplicada*. Desclée de Brouwer.

- Perdahli Fis, N., et al. (2010). Predictors of severe psychopathology in child victims of sexual abuse: *The role of judicial latency and abuse chronicity in a Turkish forensic sample*. *European Child & Adolescent Psychiatry*, 19(11), 823-832.
- Peterson, L., et al. (2020). Evaluating the "Kids and Teens in Court" (KTIC) program: A randomized controlled trial of pre-trial preparation and affect regulation. *Law and Human Behavior*, 44(3), 215-229.
- Piamenta, O., y Gal, T. (2021). Predictability, inclusion, and relationality: *The lived experiences of child witnesses in therapeutic jurisprudence frameworks*. *Trends in State Courts*, 11(1), 34-45.
- Randell, K., et al. (2022). Environmental triggers and physical distancing in the courthouse: Impact on acute anxiety among minor witnesses. *Journal of Forensic Psychology Research and Practice*, 22(4), 311-329.
- Save the Children. (2022). *Justicia para niños y niñas: El modelo Barnahus y la prueba preconstituida en España*. Save the Children.
- St George, J., et al. (2020). Jury questions in child sexual abuse trials: Challenging delayed disclosure and penalizing the minor's narrative. *Applied Cognitive Psychology*, 34(3), 678-689.
- Tribunal Supremo (España). (2023). Sentencia 125/2023 sobre la valoración de la prueba testifical en menores. Sala de lo Penal.
- UNICEF. (2024). *Towards a world free from sexual violence against children: Global estimates and trend analysis*. United Nations Children's Fund. <https://www.unicef.org/reports/towards-world-free-from-sexual-violence-against-children>
- Villacampa, C. (2020). *Victimización secundaria y sistema de justicia penal*. Tirant lo Blanch.
- Villacampa, C., y Torres, N. (2020). *Secondary victimization of child sexual abuse victims in the Spanish criminal justice system*. *International Review of Victimology*, 26(2), 211-231.
- Zajac, R., et al. (2017). Cross-examination of child witnesses in contemporary courts: Volume of questions, linguistic structures, and witness communication breakdown. *Frontiers in Psychology*, 8, Artículo 1254.

6. Anexo

Anexo A. Tabla de evaluación de calidad y criterios de inclusión de los estudios seleccionados

Autores	Diseño metodológico	Eje temporal	Eje procedimental	Eje ambiental	Calidad / Riesgo de sesgo
Perdahli Fis et al. (2010)	Cuantitativo retrospectivo	Sí	Sí	No	Alta (Criterio AXIS)
Hayes y Bunting (2013)	Métodos mixtos	Sí	Sí	Sí	Alta (Criterio AXIS/CASPe)
Hobbs et al. (2014)	Cuantitativo transversal	No	Sí	No	Alta (Criterio AXIS)
Christensen et al. (2016)	Cuantitativo de archivo	Sí	Sí	No	Alta (Criterio AXIS)
Zajac et al. (2017)	Cuantitativo transversal (M=358p.)	No	Sí	No	Alta (Criterio AXIS)
Elmi et al. (2018)	Cuantitativo longitudinal	Sí	Sí	No	Alta (Criterio AXIS)
Jouriles et al. (2020)	Cuantitativo transversal	No	Sí	Sí	Alta (Criterio AXIS)
Peterson et al. (2020)	Cuantitativo experimental (RCT)	Sí	Sí	Sí	Alta (Criterio AXIS)
St George et al. (2020)	Cualitativo descriptivo	No	Sí	No	Alta (Criterio CASPe)

Baía et al. (2021)	Cuantitativo retrospectivo	Sí	Sí	No	Alta (Criterio AXIS)
Joleby et al. (2021)	Cuantitativo de archivo	No	Sí	No	Alta (Criterio AXIS)
Piamenta y Gal (2021)	Cualitativo fenomenológico	No	Sí	Sí	Alta (Criterio CASPe)
Butterby y Hackett (2022)	Cualitativo fenomenológico	Sí	Sí	Sí	Alta (Criterio CASPe)
Randell et al. (2022)	Métodos mixtos	Sí	Sí	Sí	Alta (Criterio AXIS/CASPe)